

Brújula

CIUDADANA

NUEVA ÉPOCA

Marzo 2018

UNA MIRADA CIUDADANA A LOS RIESGOS QUE ENFRENTAN LAS ELECCIONES



1. Retos y riesgos del proceso electoral 2018
2. Comicios regionales y sus desafíos
3. Población mexicana residente en el exterior y las elecciones



BRÚJULA CIUDADANA,

Año 10, Número 97, marzo 2018, es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Tepic 83, Colonia Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06760, Tel. (55) 55141072,

www.iniciativaciudadana.org.mx/brujulaciudadana
Editor responsable: Elio Villaseñor Gómez.
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2017-080214424300-203, ISSN en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Editora de la revista, Delmy Xiomara Peraza Torres, Tepic 83, Colonia Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06760, fecha de última modificación, 26 de febrero de 2018.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. El material de esta publicación puede ser mencionado o reproducido siempre y cuando se cite la fuente.

Foto de portada:
ProtoplasmaKid vía Wiki Commons.

CONTENIDO

UNA MIRADA CIUDADANA A LOS RIESGOS QUE ENFRENTAN LAS ELECCIONES

-
- 01 **Presentación**
Elio Villaseñor Gómez
-
- 1) **RETOS Y RIESGOS DEL PROCESO ELECTORAL 2018**
-
- 03 **Sobre el uso político de las instituciones y el gran déficit de credibilidad**
Pedro Javier González G
-
- 09 **El desastroso panorama electoral y los preparativos para la tormenta perfecta**
Clara Jusidman
-
- 16 **Elección compleja: asumir los retos para fortalecer la confianza**
Arturo Sánchez Gutiérrez
-
- 22 **Tres coaliciones, tres plataformas, tres futuros posibles**
Ivonne Acuña Murillo
-
- 2) **COMICIOS REGIONALES Y SUS DESAFÍOS**
-
- 29 **Las elecciones en Veracruz en 2018**
Alberto J. Olvera
-
- 34 **Jalisco a votación: la disyuntiva entre lo que queremos y lo que hay**
Francisco Franco
-
- 40 **Elecciones para gobernador en Puebla 2018, el pendiente democrático**
Marco Domínguez Sánchez
-
- 45 **Pronunciamiento Ciudadano sobre las Candidaturas - CDMX**
Observatorio Ciudadano en Defensa de la Constitución Política de la Ciudad de México
-
- 3) **POBLACIÓN MEXICANA RESIDENTE EN EL EXTERIOR Y LAS ELECCIONES**
-
- 47 **Voto en el extranjero y la agenda migrante**
Daniel Tacher
-

PRESENTACIÓN

Elio Villaseñor Gómez

DIRECTOR DE INICIATIVA CIUDADANA PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DIÁLOGO A.C.

La arena que en que se desarrolló la intercampaña electoral ha puesto de manifiesto una vez más la gran descomposición que afecta al país, donde los abusos de poder están a la orden del día, evidenciados en casos como el del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que no avanza; igual sucede con las investigaciones sobre los sobornos hechos por Odebrecht a funcionarios mexicanos, las responsabilidades del socavón de la autopista México - Acapulco, el uso de los recursos públicos para partidos o empresas fantasma que han sido denunciados, los miles de desaparecidos incluidos los 43 normalistas de Ayotzinapa y muchos otros casos en los que no se ha hecho justicia por la corrupción e impunidad que prevalece en México.

En esta situación, a muchas personas nos indigna que quienes ostentan cargos públicos hayan hecho de ellos un gran negocio y, además, usen a las instituciones del Estado para beneficiar a sus socios y castigar a sus adversarios.

Este puede ser un gran peligro por el hartazgo de la ciudadanía, que no encuentra eco en este ambiente electoral donde los bienes públicos han sido secuestrados por intereses privados.

La forma de ejercer el poder ha caído en una red de complicidades y de simulación para dejar de aplicar nuestras leyes y simplemente proteger los intereses de la clase política para que el sistema siga caminando.

Por otra parte, la sociedad atestigua cómo se restauran sin apocamiento las prácticas más tradicionales y burdas del presidencialismo autoritario, con la utilización de las instituciones del Estado para influir en el proceso electoral en marcha.

Ello ocurre sin que importe la exposición pública y las consecuencias, que anuncian una contienda compleja y que difícilmente quedará en los estrechos marcos de las reglas del juego electoral, mismos que deberían garantizar las instituciones encargadas de dar certeza, credibilidad y sancionar con legitimidad los resultados de los comicios.

En este contexto ciudadanas y ciudadanos no buscamos más de lo mismo ni tampoco bonitas promesas, sino construir medidas concretas para enfrentar con políticas efectivas la inseguridad, corrupción e impunidad.

Las organizaciones de la sociedad civil hemos presentando no sólo propuestas, sino nuevos mecanismos para que los gobernantes cumplan con la rendición de cuentas.

La gran tarea de estas iniciativas y otras que irán surgiendo en el ambiente electoral consiste en que los pocos avances logrados no se conviertan en letra muerta, ya que estamos ante el dilema de recuperar el espacio público para el interés general o dejar que la corrupción siga deteriorando o destruya el tejido social.

La coyuntura exige asumir una responsabilidad histórica y política que impida una mayor degradación en las condiciones de convivencia de la sociedad mexicana. La propuesta que debe privilegiarse en estos momentos es la de construir un país, y no su socavamiento, con un ejercicio cívico que abone a un proyecto de nación y exija una altura de miras de la acción política igualmente constructiva.

Frente a esta situación, la edición 97 de Brújula Ciudadana recoge distintas reflexiones sobre el complejo escenario que se está generando en torno a las elecciones de este año no solo en el ámbito federal sino en algunas regiones donde se realizarán procesos locales.

SOBRE EL USO POLÍTICO DE LAS INSTITUCIONES Y EL GRAN DÉFICIT DE CREDIBILIDAD

Pedro Javier González G

INICIATIVA CIUDADANA PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DIÁLOGO A.C.

Se suele establecer un símil entre la guerra y las campañas electorales. Con base en esta semejanza, se afirma que las campañas electorales, por definición, pueden ser duras y ríspidas; que más que presentar propuestas al electorado, se enfocan en marcar y exagerar contrastes con los contendientes y que, para tal efecto, no se vacila en utilizar cualquier recurso. Pero, en última instancia, las campañas se enmarcan en un conjunto de reglas que marcan límites que no deben rebasarse. Si en el caso de la guerra hay reglas y convenciones que las fuerzas beligerantes deben respetar, la lucha electoral debe estar sometida a reglas cuya observancia es obligatoria para todos los participantes.

Debido a la larga historia de manipulación de los procesos y los resultados electorales, las reformas que abrieron el camino a la transición democrática, sobre todo a partir de los años noventa del siglo XX, pusieron especial énfasis en evitar la utilización de los recursos y las instituciones del Estado con fines electorales; de ahí la decisión clave de ciudadanizar y dotar de autonomía a la autoridad electoral. Y ese es precisamente el meollo del actual conflicto en torno a las



acusaciones a Ricardo Anaya: ¿se han utilizado o no las instituciones del Estado para descarrilar la candidatura del abanderado de la coalición *Por México al Frente*?

Tanto el candidato Anaya como sus detractores alegan contar con pruebas documentales que sustentan ya sea la operación de lavado de dinero subyacente en la compra-venta de una nave industrial o, por el contrario, la legalidad de dicha operación. Es imposible pronunciarse acerca de quién tiene la razón jurídica. Sin embargo, sí cabe subrayar que, hasta ahora, las acusaciones sólo han sido un fenómeno mediático y que, en todo caso, es la autoridad la que está obligada a dar el primer paso y proceder por la vía judicial. La pregunta entonces es por qué la PGR no ha procedido y dado al caso un tratamiento jurídico y no político-mediático, si tiene elementos suficientes.

Al margen de los cuestionamientos surgidos a propósito de las diferencias entre el manejo de este caso y otros de gran relieve (por ejemplo, la llamada “Estafa maestra” o los sobornos de Odebrecht), lo cierto es que la actuación de la Procuraduría e, incluso, del SAT genera dudas. En primer lugar, por la difusión de un video y la filtración de información relativa al caso, pues a fin de cuentas no debe olvidarse que Alberto Elías Beltrán, el encargado del despacho de la PGR, fue el

mismo que cesó al fiscal electoral Santiago Nieto por hacer públicos algunos pormenores del caso Odebrecht-Lozoya.

En segundo lugar, y esto es lo más grave, si realmente se cuenta con elementos probatorios de la culpabilidad de Ricardo Anaya, la obligación de la PGR es proceder con oportunidad por la vía judicial, pues sería una gran irresponsabilidad permitir el arribo a la presidencia de alguien que ha incurrido en un delito como el lavado de dinero. De ahí la suspicacia: se opta por que el caso siga siendo meramente mediático con el fin de debilitar una estrategia electoral que ha sido exitosa e influir en la percepción de los potenciales votantes sobre el candidato.

No sería ésta la primera vez que el Estado mexicano ha recurrido a este tipo de mecanismos. Desde la famosa frase de Juárez de que, “con los amigos, benevolencia y, con los enemigos, todo el peso de la ley”, existe una larga tradición de utilización de la ley como mecanismo de premio y castigo que permitió a las élites gobernantes asegurar la disciplina y la lealtad de la clase política en su conjunto. Recientemente, sin embargo, han tenido lugar algunos cambios en la utilización facciosa de la ley. En primer lugar, en un contexto de mayor pluralidad y apertura a los medios, los casos de conversión de las instituciones en instrumentos del ejercicio del

poder son más visibles. Antes las amenazas y los premios transcurrían en medio de la más absoluta opacidad. En segundo lugar, y debido a que en la época dorada del presidencialismo autoritario no había una verdadera competencia electoral, un aspecto novedoso consiste precisamente en el empleo de la ley con fines político-electorales.

En relación con este segundo punto y más allá de diferencias puntuales, el caso Anaya recuerda casos previos como el desafuero de Andrés Manuel López Obrador o la difusión dolosa de información que a la postre resultó ser falsa, tal como ocurrió en 2006, cuando el candidato priísta al gobierno de Jalisco fue señalado por tener vínculos con el narcotráfico. Más recientemente, vale la

pena recordar las acusaciones que, al inicio de la campaña por la gubernatura del Estado de México, cuando Josefina Vázquez Mota aparecía bien posicionada, se hicieron su familia por supuesto lavado de dinero y que, una vez que la campaña se desplomó, se dio carpetazo a un asunto carente de sustento jurídico.

Existen, por tanto, elementos que validan la lectura del uso indebido de las instituciones del Estado. Así las cosas, la otra interrogante clave es por qué el gobierno muestra tanto interés en descarrilar la candidatura de quien, a fin de cuentas, no encabeza las encuestas de intención de voto. Las respuestas son necesariamente de carácter hipotético. Hay, desde luego, el interés de Enrique Peña Nieto



en que el PRI conserve el poder presidencial y una cuota importantes de curules y escaños en el Congreso federal. Ello le permitiría seguir siendo un factor con influencia (así sea indirecta) en la vida partidaria y política nacional, al tiempo que reforzaría la posición de su grupo político, el Grupo Atlacomulco. Hay, sin embargo, otras dos hipótesis de mayor peso y dignas de consideración.

La primera se relaciona con las oportunidades de negocio que a la élite priísta y al propio presidente Peña le ofrecen la reforma energética o la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Perder el poder presidencial y la capacidad de influir en la toma de decisiones significa dejar de ser un factor clave en la negociación de los contratos celebrados al amparo de las reformas.

La segunda es el miedo. Tanto el presidente como muchos integrantes de la cúpula priísta están conscientes de que se juegan su futuro: la libertad, la posibilidad de un retiro tranquilo y, sobre todo, el bienestar de sus familias. Lo ocurrido en algunos países de América Latina (Brasil, Argentina, Perú y Guatemala) representa para ellos una inequívoca señal de alarma. Esta percepción se refuerza con la suerte que han corrido algunos ex gobernadores del PRI en entidades donde la alternancia tuvo lugar y que representan un destino que a toda costa se desea evitar. Los casos de Javier Duarte y Roberto Borge enfrentando juicios por corrupción desde la cárcel o el de César Duarte que, pese a su reciente exoneración de algunos delitos federales, todavía enfrenta otras causas que implican que el riesgo de ser extraditado para encarar un juicio por actos de corrupción siga vivo.

A esta lista cabría agregar al ex gobernador nayarita Roberto Sandoval, con acusaciones serias en su contra. Todos estos casos ilustran por qué el temor no es gratuito y, de paso, también arrojan luz sobre los motivos de las resistencias de la clase política a concluir reformas de gran calado como la transformación de la Procuraduría en una Fiscalía autónoma o a allanar el camino para que el Sistema Nacional Anticorrupción empiece a funcionar de acuerdo con su diseño original y arroje sus primeros resultados.

Dados estos antecedentes, es un asunto de vida o muerte evitar la eventual victoria de Ricardo Anaya, quien ha declarado que si hay evidencias de actos graves de corrupción no dudaría en llevar a juicio al presidente Peña y que, para tal efecto, solicitaría la colaboración de instancias internacionales. De ahí que, ante esta posibilidad, la élite en el poder, como animal herido, está reaccionando con gran ferocidad.

En este escenario, la victoria de López Obrador parece el mal menor. Aun si se logra hundir la campaña de Anaya y de la coalición *Por México al Frente*, resulta muy improbable el triunfo de José Antonio Meade; de hecho, el éxito de la campaña mediática contra Anaya beneficiaría principalmente al tabasqueño, quien con un claro sentido de oportunidad, ha reiterado a lo largo de su campaña que no habrá venganzas ni cacería de brujas; de hecho, después de la declaración del presidente Peña de que no

meterá las manos en la elección y de que habrá juego limpio, López Obrador, en aras de la concordia, expresó su beneplácito por tal compromiso.

Es indudable que, en medio de un enorme desprestigio, la élite política tiene capacidades mermadas para producir pactos de mutuo beneficio. En el pasado, las querellas entre las distintas facciones de la clase política se resolvieron dentro del propio partido oficial, abriendo las puertas a la obtención de beneficios personales mediante el uso patrimonial de los recursos del Estado. Ahora, en la era del pluralismo y la post alternancia, el pacto estabilizador entre las élites políticas adoptó la forma de un pacto de impunidad. Mantener vivo dicho pacto resulta crucial para el grupo hoy en día en el poder. ¿Es López Obrador, considerado como mal menor, una apuesta menos arriesgada? En verdad, hay razones de sobra para que el grupo en el poder esté nervioso.

Hace un par de semanas, el periódico *El Financiero* publicó una encuesta sobre la percepción del caso Anaya. Resaltan dos puntos. El primero es que la mayoría de los entrevistados manifestó creer que el candidato de *Por México al Frente* sí es culpable de lavado de dinero. El otro dato significativo es que también es mayor el número de quienes piensan que la PGR está siendo utilizada con fines políticos. En pocas palabras, lo que estos resultados en apariencia contradictorios muestran es el gran déficit de credibilidad de actores políticos e instituciones en general.

Alertan

SOBRE USO DEL PODER DEL ESTADO PARA INCIDIR EN LAS ELECCIONES

UN GRUPO DE INTELLECTUALES Y ACADÉMICOS alertó sobre las “instituciones débiles” de la joven democracia mexicana y su erosión con el uso del Ministerio Público federal para deteriorar la imagen del candidato presidencial de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

En una “[Carta a Enrique Peña Nieto](#)”, hacen estas afirmaciones, entre otras:

“...el uso de la Procuraduría General de la República para perseguir a un líder de la oposición, pone a México junto a países con regímenes autoritarios y democracias totalmente disfuncionales”.

“Ante la falta de autonomía del Ministerio Público federal, usted presidente Peña Nieto es la máxima autoridad responsable de este proceso”.

“...este posicionamiento no implica de ninguna manera un apoyo a la candidatura de Ricardo Anaya sino una preocupación fundada en el uso del poder del Estado para incidir en el destino de los comicios”.

EL DESASTROSO PANORAMA ELECTORAL Y LOS PREPARATIVOS PARA LA TORMENTA PERFECTA

Clara Jusidman

PRESIDENTA FUNDADORA, INCIDE SOCIAL

Durante poco más de cinco décadas de participar ejerciendo mi derecho a votar y habiendo impulsado por poco más de 25 años proyectos ciudadanos dirigidos a crear una institucionalidad electoral que equilibrara el terreno de los comicios para los partidos políticos y a permitir a la ciudadanía ejercer voto con plena confianza, en esta ocasión por primera vez, no sé por quién votar, ni cómo contribuir para que el proceso electoral en curso, el gobierno en el poder y su partido no realicen un gran fraude.



Creo que muchos integrantes de mi generación que apostamos a transitar hacia un sistema democrático empezando por lo electoral, estamos desilusionados, desanimados y frustrados al observar una regresión de cerca de 40 años en las deseadas elecciones del Estado de México y de Coahuila del año pasado. Creo que todas y todos vimos esas elecciones de estado menos las instituciones electorales que debieron evitarlo.

Estamos desilusionados, desanimados y frustrados al observar una regresión de cerca de 40 años en las deseadas elecciones del Estado de México y de Coahuila del año pasado.

Tantos días y horas dedicados a participar en la observación electoral, en los consejos ciudadanos o incluso, directamente en las instituciones electorales o bien, en la aportación de ideas para reformar la legislación electoral con el fin de darle mayor equidad a los procesos fortaleciendo la participación de ciudadanos y ciudadanas independientes en su organización, fueron totalmente inútiles frente a la voracidad de los partidos políticos por capturar a las instituciones electorales, subordinarlas y utilizarlas en el mercado político que han creado.

La sensación final es que a los partidos políticos la ciudadanía les importa sólo para simular su legitimación mediante el voto y se olvidan de ella cuando son gobierno. Lo que realmente les interesa es acceder y perpetuarse en el poder político, así como asegurar los recursos económicos y la influencia que significa ese poder.

Una serie de nubarrones en el panorama electoral

De este modo el panorama electoral de 2018 está plagado de nubarrones que pueden transformarse en la tormenta perfecta.

El mayor de esos nubarrones es la ausencia de una oferta política con un proyecto claro

para el futuro del país frente a las amenazas y las oportunidades que se vislumbran para los próximos seis años. En el único caso en que se ha elaborado una propuesta que es el de Morena, no resulta fácil para muchos acceder a la misma.

Por ello, se extraña en los discursos de los candidatos el poder escuchar posiciones claras respecto de la infortunada presidencia de Trump y sus intenciones de cambiar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y desatar una guerra comercial mundial para retornar al proteccionismo y beneficiar a las élites económicas de su país, o su afán por denostar a los migrantes mexicanos y acabar con el programa DACA, e insistir en la construcción del muro fronterizo. Escuchar qué piensan los candidatos respecto de lo que significará la firma del TPP para México.

No conocemos sus posiciones en relación con el fracaso de la reforma energética para la población mexicana y la entrega de nuestros recursos energéticos y mineros a la explotación de empresas privadas nacionales y extranjeras.

Tampoco tenemos claridad sobre su proyecto para reducir la profunda desigualdad, la persistente pobreza, la sostenida discriminación y violencia ejercida contra las mujeres, las poblaciones indígenas, las



Se extraña en los discursos de los candidatos el poder escuchar posiciones claras respecto de la infortunada presidencia de Trump. Foto de Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

juventudes, la población de la diversidad sexual, las personas mayores, entre otras. Desconocemos qué nos proponen frente al cambio climático y el aumento de desastres naturales, frente a creciente inseguridad de origen delincuencia y frente a las transformaciones del mundo laboral por las presiones del capital y por la cuarta y quinta revoluciones tecnológicas.

Ninguno está cuestionando la gigantesca acumulación de ganancias en el sector financiero

que opera en el país o la concentración de riqueza en el 1% de la población frente a la pobreza en que vive la mayoría de las y los mexicanos. No parecen reconocer que les estamos negando a nuestros jóvenes un proyecto esperanzador de futuro y que, por ello, viven en la inmediatez.

Lo más que llegamos a vislumbrar es que dos candidatos a la presidencia nos proponen más del mismo modelo económico neoliberal que ha conducido a México a la crisis



Cinco grandes nubarrones aparecen cada vez más claramente en el firmamento en esta etapa de las intercampanas. El primero se refiere al desastroso desempeño del Tribunal Electoral del Poder Judicial el cual, bajo el pretexto de un estricto apego a la ley, se la pasa revocando acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

humanitaria que estamos viviendo y que el tercero, con gran pragmatismo, está haciendo concesiones para congratularse con las élites a fin de que lo dejen llegar a la presidencia. Intuimos en los tres y en las coaliciones que los apoyan, un retroceso previsible en los derechos reproductivos y en los derechos sexuales de las mujeres y en los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual. Nuevamente, el estado laico está en riesgo.

La disputa por la presidencia - parecen decirnos - se dirime con las élites; los demás somos clientelas a las que hay que mantener desinformadas y administrar, asegurando

nuestro voto con dádivas y programas sociales, o con favores y la esperanza de que siguiendo a alguno de los lidercillos que proliferan en estos tiempos vamos a obtener una casa, o una beca para nuestros hijos, o un empleo precario o una transferencia monetaria para la subsistencia, un saco de cemento o un tinaco.

Cinco grandes nubarrones aparecen cada vez más claramente en el firmamento en esta etapa de las intercampanas. El primero se refiere al desastroso desempeño del Tribunal Electoral del Poder Judicial el cual, bajo el pretexto de un estricto apego a la ley, se la pasa revocando acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Este grupo de magistradas y magistrados, con los más altos sueldos de toda la administración pública, de manera irresponsable nos pone frente al alto riesgo de que no tengamos información preliminar de los resultados de la elección para la presidencia de la República una vez que se cierren todas las casillas en el país, sino que esta se produzca hasta pasadas las dos de la mañana del día siguiente. Esta decisión, así como el recurso interpuesto por el PVEM ante el propio Tribunal para que la solución encontrada por el Consejo General del INE a fin remontar el obstáculo interpuesto por el TEPJF y si poder tener resultados preliminares a una hora más temprana, no dejan más que generar desconfianza y pen-

sar que contribuye a la estrategia diseñada por el PRI-Gobierno como parte del Gran Fraude que han venido preparando. El recién renovado TEPJF se mira con la institución electoral más capturada por el Gobierno y la coalición Todos por México y, por lo tanto, la más desconfiable.

Un segundo nubarrón está formado por el total desaseo en la conformación de las tres coaliciones de partidos que está provocando la huida de viejos militantes de unos partidos para sumarse a coaliciones formadas por partidos con los que en otra época tenían diferencias de fondo en ideología, valores

y prioridades. A estas alturas del proceso electoral no parece haber diferencia alguna entre las tres coaliciones pues las tres están integradas por personas conservadoras y progresistas, por demócratacristianos y socialdemócratas, por excomunistas, exsocialistas y neoliberales irredentos. Su común denominador es ser parte de la clase política que no está dispuesta a dejar de seguir viviendo del presupuesto público.

Un tercer nubarrón en el ambiente surge de la aceptación de ingreso y la postulación como candidatos por las tres coaliciones de personajes, hombres y mujeres, con cuestionadas historias en los ejercicios previos del poder que realizaron por enriquecimiento ilícito, nepotismo, abuso, corporativismo, ejercicio de violencia, acoso sexual y ausencia de ética pública. En un país con los niveles de impunidad de nuestro país, resulta difícil contar con las pruebas de esos comportamientos, habiéndose además colocado todos los obstáculos para el desarrollo de un sistema confiable anticorrupción. Por ello son solo los testimonios de las personas que han padecido e incluso en ocasiones participado en las reprobables conductas que se mencionan, lo que permite conocer esas historias oscuras de personajes políticos.

Un cuarto nubarrón apareció ante el uso faccioso por parte del Gobierno Federal de

Ello pone en evidencia la ausencia de proyectos de país compartidos por los integrantes de las coaliciones y la certeza de que el interés de los políticos que saltan de una a otra es la búsqueda de una posición en los espacios políticos que les permita seguir gozando de los beneficios del poder público y de sus recursos. Es el patrimonialismo en su versión más descarada. El poder por el poder mismo.

dos instituciones: la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para perseguir, por una parte, con gran velocidad y atingencia no aplicadas en otros casos de mayor envergadura, con el fin de tratar de bajar de la contienda electoral a uno de los candidatos bajo acusaciones aún no probadas, de enriquecimiento ilícito y por otra parte, para castigar a un gobernador de la oposición que se atrevió a promover investigaciones sobre el desvío de recursos fiscales hacia un partido político y para rescatar a un prominente operador de esos desvíos perteneciente al PRI que actualmente se encuentra en la cárcel.

No quisiera dejar de mencionar un quinto gran nubarrón que durante años personalmente he tratado de combatir: la captura

de la estructura ciudadana del INE- desde el Consejo General, hasta los Consejos Distritales e incluyendo a los OPLES- por los propios partidos políticos, en particular por el PRI y por las burocracias electorales. Sistemáticamente, cuando en las sucesivas reformas electorales, proponíamos fortalecer el pilar ciudadano de las autoridades responsables de organizar las elecciones, lo que constatábamos era el profundo desprecio de los congresistas al trabajo de la ciudadanía independiente en esa organización. En cambio, se ampliaban los beneficios para los partidos políticos y sus cúpulas, así como las responsabilidades asignadas a las instituciones electorales. Así se fue mermando la confianza que en algún momento llegó a tener el antiguo IFE.

Al menos estos cinco nubarrones nos dan claros indicios de que el Gobierno Federal está usando todo el acervo de recursos y experiencia para que, sea como sea, impedir que le ganen la presidencia de la República. Si realmente lo logra, la ya de por sí vulnerada paz social y nuestra precaria democracia están en alto riesgo.

Un llamado A IMPEDIR PRÁCTICAS FRAUDULENTAS EN LAS ELECCIONES Y LA COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES

VARIAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL así como académicos de distintas universidades presentaron el documento llamado “Exigencias mínimas para las elecciones de 2018”, que expresa su preocupación por la incertidumbre y desconfianza que han caracterizado a los procesos electorales de los últimos años. “Debemos tener conciencia de que las irregularidades han comenzado”, advierten. Otros aspectos importantes son los siguientes:

“La fiscalización de los órganos electorales debe ser estricta y transparente. No debemos permitir que se repitan los acontecimientos de 1988 que retrasaron, durante una generación, la transición democrática de nuestro país”.

“Se ha dicho que todos hablan de combatir la corrupción como bandera principal, lo cierto es que las instituciones construidas para hacerlo, están controladas y descabezadas”.

“Las leyes han atribuido facultades a las autoridades electorales y al Sistema Nacional Anticorrupción, pero estos no las han querido ejercer, o las han aplicado de manera selectiva”.

“Exigimos a todos los partidos políticos y candidatos cumplir estrictamente la ley y hacemos un llamado responsable a las entidades involucradas para apoyarse en la sociedad civil de manera permanente, a efecto de desempeñar su papel de garantes de la legalidad”.

ELECCIÓN COMPLEJA: ASUMIR LOS RETOS PARA FORTALECER LA CONFIANZA

Arturo Sánchez Gutiérrez

DECANO DE LA ESCUELA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO DE MONTERREY

El proceso electoral entra en una nueva etapa que, sin duda, será ríspida entre los candidatos presidenciales y con nuevos retos para el Instituto Nacional Electoral (INE). Al momento de entregar estas líneas, faltan 7 días para el inicio de las campañas y aún no está claro quiénes serán los candidatos presidenciales definitivos. Faltan 101 días para la jornada electoral, no han empezado las campañas y los candidatos de las coaliciones ya han hecho todo tipo de propuestas, han anunciado políticas que aplicarían durante su gobierno y han propinado fuertes ataques a sus contrincantes. Para muchos, las campañas iniciaron desde diciembre, cuando arrancaron las precampañas. Después, sin mítines ni llamados al voto, la intercampaña significó otro espacio para que los candidatos continuaran fortaleciendo su posicionamiento ante la sociedad.

Para los aspirantes a una candidatura independiente, la historia fue diferente. El período de recolección de firmas estuvo marcado por el debate sobre la funcionalidad de la aplicación diseñada por el INE. Si bien desde el principio destacaron cuatro o cinco aspirantes, la recolección de firmas no significó un posicionamiento sólido para ellos. Más pa-

recía una competencia entre independientes, que el fortalecimiento de la figura alternativa, para tener opciones diferentes a las de los partidos.

Después, surgió el anuncio de que se usaron mecanismos fraudulentos para obtener las firmas por los aspirantes a una candidatura



Para los aspirantes a una candidatura independiente, la historia fue diferente. El período de recolección de firmas estuvo marcado por el debate sobre la funcionalidad de la aplicación diseñada por el INE.

independiente para diputado federal. Ello ensució el proceso. A la postre, el INE concluyó que El Bronco y Armando Ríos Pitter habían simulado un número importante de firmas que los dejaban fuera de la competencia. Será la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que dictamine la procedencia o no de las candidaturas.

Para el INE, estos procesos significaron nuevos retos. Fue necesario definir cuáles eran los límites del uso de la propaganda durante las “pre” e “inter” campañas, e incluso se cuestionó la posibilidad de los candidatos para debatir durante las últimas semanas de las intercampañas. En el caso de los in-

dependientes, los retos tuvieron que ver con la revisión oportuna y transparente de las firmas. La aplicación diseñada por el INE facilitó las cosas, pero las dificultades iniciales generaron desconfianza y la consecuente crítica a la forma como el INE enfrentó este reto.

Retos de candidatos y autoridades electorales en la campaña

En la etapa que sigue vendrán otros retos, tanto para los candidatos, como para el trabajo propiamente de organización electoral del INE. Por primera vez los candidatos presidenciales participarán en tres debates, uno

cada mes de campaña, además de que el INE busca utilizar formatos más flexibles, con participaciones de moderadores y opinadores. Con ello, los electores saldrán ganando y los candidatos se verán más exigidos en su comunicación.

Por otro lado, los candidatos estarán obligados por la normatividad del INE a un esquema de fiscalización que implica informar de todos sus ingresos y egresos cada tercer día durante la campaña. Al respecto, sería conveniente que el INE informara periódicamente el nivel de cumplimiento de esta obligación por parte de cada candidato.

Paralelamente, la autoridad electoral enfrenta otro tipo de retos. Es necesario recordar que es la primera vez que el INE aplica la ley vigente en una elección presidencial, y que paralelamente a las tres elecciones federa-

les, habrá 30 entidades de la República con elecciones locales, 8 de ellas con elección de Gobernador, más la Ciudad de México que elige a su Jefe de Gobierno. No hay precedente de una elección tan compleja y con tantos estados con elecciones simultáneas. Por ello, el reto para el INE este año es diferente al de otras elecciones. La mayor diferencia se llama: Casilla Única.

La casilla única es el mayor cambio organizacional que se derivó de la reforma electoral de 2014. En síntesis, en el caso de una elección local que coincide con la elección federal, en lugar de poner dos casillas (una por el INE y otra por la autoridad local) solo se instala una mesa con 6 funcionarios en lugar de 4 y ahí se reciben todas las votaciones, se realizan los cómputos y se llenan las actas de ambas elecciones. Técnicamente la operación de la casilla es muy similar, el elector no tiene que

hacer dos filas y en un solo momento emite su voto por sus autoridades locales y federales. Por lo tanto, el número de boletas que se maneja en estas casillas es mayor y ahí se integran los dos paquetes que irán a las dos autoridades electorales.

En este sentido, para el INE se trata de un problema de



capacitación adecuada. En virtud de que las tareas de Capacitación Electoral corresponden al INE, el reto este año consiste en ubicar y capacitar a 9 funcionarios para cada una de las 155,484 casillas que se planean instalar el próximo 1 de julio. Seis de esos funcionarios fungirán como titulares y tres más serán suplentes.

De acuerdo con los números del INE, se requerirán 1.4 millones de funcionarios de casilla, capacitados por un ejército de 45,000 capacitadores y supervisores, distribuidos en toda la República. La capacitación se vuelve compleja porque cada entidad tiene en su ley particularidades que hace necesario incorporar procedimientos específicos con manuales y documentos de capacitación diferentes en cada estado. Hasta aquí, todo es cuestión de que el INE realice bien su tarea y se integren adecuadamente las mesas directivas de casilla.

Dos retos mayúsculos: los cómputos y la fiscalización de cada candidato

La parte más complicada es la realización de los cómputos al final de la jornada electoral. En este caso, el reto es seguir procedimientos muy precisos, pero se deben de hacer simultáneamente para contar los votos federales y los locales. Así lo establece la ley para evitar

que los resultados de una elección se retrasen más que los de la otra. Por eso, la integración de la casilla única incluye a dos secretarios para que simultáneamente se llenen las actas correspondientes. Otra vez, se trata de un problema de capacitar adecuadamente a los funcionarios de casilla. Sin embargo, el reto fundamental es que los procedimientos se puedan realizar adecuadamente sin consumir tiempo en exceso.

Los funcionarios de casilla empiezan a trabajar a las 8:00 horas del día de la jornada y no descansarán hasta que los paquetes electorales hayan sido entregados a la autoridad local y a los distritos del INE. No solo se trata de dar a conocer los resultados electorales lo más rápido posible, en especial los correspondientes a las elecciones para gobernadores y para Presidente de la República. Se trata de garantizar que al final de los cómputos, los paquetes sean transportados con rapidez y seguridad. Mientras más se tarde el cómputo en casilla, más complejo será el traslado y más cansados estarán los funcionarios.

El segundo de los retos mayores del INE será la fiscalización de los ingresos y egresos que cada candidato realice durante la campaña electoral. Al igual que la Capacitación Electoral, la Fiscalización es una tarea centralizada en el INE, ya sea para los contendientes locales o los federales.

En este sentido es necesario recordar que se elegirán en total 18,311 puestos de elección popular. Solo en la elección federal se incluyen 629 cargos: un presidente, 500 diputados y 128 senadores. En el caso de las elecciones locales se elegirán 17,682 cargos: 8 gubernaturas, un Jefe de Gobierno, 972 diputaciones locales y 1,597 presidencias municipales a las que hay que sumar a los integrantes de sus ayuntamientos. El reto para el INE consiste en fiscalizar las campañas de todos los contendientes a esos cargos, no solo de los ganadores.

Una vez más, el problema fundamental es el tiempo. La Unidad de Fiscalización del INE debe realizar el trabajo en un plazo no mayor de 40 días, ya que los diputados y senadores electos asumirán sus encargos el 1 de septiembre y para entonces, la fiscalización no solo deberá de haber terminado, sino que tendría que haber tiempo suficiente para el desahogo de las impugnaciones ante el Tribunal Electoral. Bajo las nuevas normas, ninguna persona electa podrá asumir su cargo sin que haya terminado el proceso de fiscalización. Incluso, es importante recordar que el rebase de los topes de gastos de campaña podrían generar, en algunas circunstancias, la nulidad de la elección.

Como se puede ver, los retos del INE para la próxima elección no son menores. A ello habría que sumar los temas recurrentes: es necesario que el PREP arroje resultados a tiempo; es conveniente resolver pronto todas las quejas y recursos que se presenten entre los partidos; el cómputo oficial y los recuentos de votos deben de ser transparentes en cada entidad; etc, etc.

Un reto, que no depende del INE o de los órganos locales electorales, es la actitud de los actores políticos. La democracia necesita, además de elecciones limpias y transparentes, que los actores sepan aceptar la victoria de la misma manera que deben aceptar la derrota. Ese es el verdadero mensaje democrático. Desde 2006, nos acostumbramos a que la noche de la elección, los principales contrincantes se declaran ganadores antes de que exista una voz oficial que se pronuncie sobre los resultados. Esa actitud daña los procesos y confunde a los electores. Después, el candidato derrotado suele desconocer los resultados y cuestiona la validez del proceso electoral. Ojalá esa tradición se rompa en el 2018.

Verificado 2018

PLATAFORMA DIGITAL CONTRA NOTICIAS FALSAS

LAS REDES SOCIALES han disparado fenómenos diversos como la difusión de noticias falsas, que han tenido gran impacto en los resultados electorales de Estados Unidos, por ejemplo, cuando se eligió a Donald Trump. Ante esta preocupación, se ha creado la plataforma digital Verificado 2018, un proyecto de periodismo colaborativo de más de 60 medios, universidades y organizaciones civiles.

Esta iniciativa tiene como objetivo enfrentar noticias malintencionadas o imprecisas y desmentirlas con información rigurosa y confirmada. Igualmente, se propone enfrentar engaños que puedan ser generados por falsos periodistas desde sitios creados para difundir noticias también falsas o por bots en Twitter, que hacen populares hashtags a favor de uno u otro candidato.



“#Verificado2018 busca enfrentar esos dos fenómenos: por un lado, las noticias falsas; por el otro, las promesas irrealizables o las críticas sin fundamento. Y quiere enfrentarlas con periodismo”, se lee en su sitio web.

TRES COALICIONES, TRES PLATAFORMAS, TRES FUTUROS POSIBLES

Ivonne Acuña Murillo

ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA¹

En contadas ocasiones a lo largo de su historia México ha enfrentado momentos cruciales en los que una decisión colectiva puede incidir en el rumbo del país, ya para bien, ya para mal. 2018 es uno de esos momentos en que la elección presidencial se inserta en un complicado contexto en el que la ciudadanía exige propuestas claras para la solución de los problemas más urgentes y, al mismo tiempo, la inclusión de proyectos de un futuro deseable.

Es en este marco que se vuelve prioritaria la revisión de las plataformas electorales y de gobierno presentadas por las tres coaliciones que tienen posibilidad real de acceder a la silla presidencial; por ello, se exponen aquí algunas ideas que bien podrían abonar en esa dirección.

Sin ninguna intención de favorecer a uno u otro candidato se comentarán las tres plataformas siguiendo el orden que las principales casas encuestadoras dan a los candidatos comenzando por quien aparece colocado en primer lugar, destacando

en los tres casos: el diagnóstico, los temas principales y las soluciones propuestas.

¹ Socióloga política; experta, analista y articulista en Sistema Político Mexicano y Género.



AMLO y su proyecto de Nación

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición “Juntos haremos historia”, encabeza la plataforma cuyo propósito principal es “vivir en un México justo, democrático, soberano, pacífico y transparente” (: 3) para lo cual se hace necesario “reorientar el rumbo del país” pues este se encuentra “en un estado de atraso, deterioro, carencia y descomposición (...) (de) decadencia nacional en materias como infraestructura, educación, salud, agricultura y medio ambiente” (: 4).

La razón principal de este deterioro es la corrupción que incrementa la desigualdad, la violencia, la desintegración, la decadencia moral y “el mal desempeño económico

del país” (: 5). Corrupción que se ha hecho visible a través del “saqueo sistemático de los presupuestos públicos por parte de un pequeño grupo” (*Idem.*), el cual además de acumular riquezas ha hecho un uso faccioso, discrecional y arbitrario no sólo de los recursos sino de las leyes, “dejando atrás a la mayoría de la población”, bajo la promesa de que algún día la riqueza empezará a derramarse”. En este caso, en la plataforma se avizora que estos abismos de inequidad se reducirán bajo la consigna “No dejar a nadie atrás” (: 9).

Este diagnóstico incluye otros temas como: pobreza, antidemocracia, la violación de los derechos humanos, el despojo de los pueblos, la destrucción del medio ambiente,

la descomposición política e institucional y la mediocridad del desempeño económico en general” (11), así como la paz, viabilidad financiera y austeridad, equidad de género, reconstrucción nacional, autosuficiencia alimentaria y energética, mercado laboral, inflación y el lugar de México en el marco de la competitividad internacional.

Para fundamentar sus afirmaciones, en la plataforma se brindan datos duros sobre el crecimiento de la economía, la pobreza, la corrupción brindados por el Barómetro Global de la Corrupción, CONEVAL, la auditoría Superior de la Federación, el Banco de México, el Banco Interamericano de Desarrollo, el *World Economic Forum*, entre otros.

A partir de este diagnóstico se propone un cambio de modelo económico más preocupado por la micro que por la macroeconomía sin que por ello se descuide a esta última. Se propone asimismo “una regeneración ética”, partiendo de la afirmación de que la corrupción no es un asunto cultural ni una forma de ser de los mexicanos ni algo a lo que deba resignarse sino “una desviación de los gobernantes que puede y debe ser erradicada” (: 6), entre otras cosas.

Ricardo Anaya Cortés y su propuesta de cambio

En la plataforma presentada por Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México



al frente”, se hace también un diagnóstico que parte de afirmar la existencia de un sistema político excluyente, restrictivo, con tendencia a acotar las libertades, la movilidad social y el desarrollo, así como gobiernos minoritarios, sin legitimidad política, electos por bajos porcentajes de votación. Una profunda crisis de legitimidad social que aqueja a las instituciones del Estado, incluyendo a los partidos políticos, sumada a una crisis que atenta contra la estabilidad social, la gobernabilidad política y el orden democrático.

Los temas principales abordados en dicha plataforma son: la transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana, el combate a la corrupción y la impunidad, la pacificación del país, un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad, el fortalecimiento de México en el mundo.

Completa el diagnóstico la existencia de una generación de gobernantes que carece por completo de valores como la honestidad, la transparencia o la ética, la ausencia de un sistema efectivo de pesos, contrapesos y rendición de cuentas. La existencia de inéditas redes de corrupción que invaden y corroen impunemente las estructuras de autoridad; un gobierno autoritario que persigue a sus opositores y que utiliza los recursos de la inteligencia para espiar a activistas y defen-

sores de los derechos humanos; que no sabe convivir en la pluralidad democrática y que ha violado sistemáticamente las garantías de libertad de expresión y seguridad para ejercer un periodismo crítico y sin miedo. Así como la persistencia de la pobreza y la desigualdad que impiden a millones de mexicanos —casi la mitad del total de la población— acceder a una vida digna.

Entre las soluciones se propone poner en el centro de las decisiones y de las políticas públicas a las personas, bajo la máxima democrática de que las y los ciudadanos mandan, para lo cual proponen mecanismos como la iniciativa ciudadana, el plebiscito, referéndum, ratificación y revocación de mandato, planeación y presupuestos participativos (: 10).

Aunque en el documento se hace un recuento detallado de los factores que harían viable esta plataforma de gobierno, no se ofrecen datos duros, ni los “cómo” ni los “con qué”. En términos generales, parece más un Plan Nacional de Desarrollo, por la generalidad y amplitud de las propuestas.

Como se puede observar la plataforma de “Juntos haremos historia”, encabezada por AMLO, está más orientada a la transformación del modelo económico, y la de “Por México al frente” al cambio de régimen político, aunque en estricto sentido en ambas se

consideran lo económico y lo político como una diada indisoluble, el acento está puesto más en uno de ambos puntos. Coinciden igualmente en temas como la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la posición de México frente al mundo y en la convicción de la necesidad de un cambio, aunque la vía para lograrlo sea diferente.

José Antonio Meade, el candidato de la continuidad

La plataforma electoral y de gobierno presentada por la Coalición “Todos por México” se caracteriza, a diferencia de las dos anteriores, por la defensa de lo que se consideran logros de la actual administración y por la presentación de las propuestas del candidato, mismas que apuntan a la defensa de la continuidad de las 11 reformas estructurales llevadas a cabo por el actual presidente Enrique Peña Nieto, de tal suerte que a la vez que se presenta como un documento de campaña da la impresión de ser el legado del presidente saliente en su último año de gobierno.

Dada la naturaleza del texto es de notar la falta de una autocrítica profunda, la cual, en todo caso, queda resumida en la frase: “Somos autocríticos y reconocemos que hay realidades que nos duelen, que nos ofenden, que nos lastiman, que nos vulneran y que

tenemos y vamos a cambiar” (: 6). No se aprecia, en este caso, una reflexión en torno a lo hecho mal o a la falta de resultados en áreas como la seguridad, el aumento de la violencia, la falta de credibilidad en las instituciones políticas, el escaso crecimiento económico, etc., sino la necesidad de soluciones diferentes y, en general, una visión de conjunto que apunta a resaltar aquello que se debe preservar en función de lo alcanzado.

Siguiendo en la lógica anterior, se habla de que “Hoy México es un país próspero (...) resultado del esfuerzo de millones de mexicanos y sus profundas transformaciones sociales y económicas (...) (que) continúa avanzando en la construcción de leyes e instituciones, de derechos y libertades (...) (como) un país cada vez más incluyente y solidario (...) (y como) un actor responsable, respetado y escuchado a nivel mundial” (: 5).



Como temas destacan aquellos que quedan incluidos en 5 ejes: economía abierta y dinámica en beneficio de las familias mexicanas, seguridad pública eficaz y con justicia eficiente, educación de excelencia, un país incluyente y solidario y un México abierto al mundo. Estos temas son atravesados por tres causas: el desarrollo sostenible, la igualdad de género sustantiva y la apuesta por la juventud.

Lo anterior deja ver claramente, que el intento de deslinde de Meade en torno del PRI es más problemático a cada paso que el candidato da para llegar a la silla presidencial.

La lectura de estas tres plataformas es un ejercicio cívico que apunta a construir una interpretación propia de aquello que proponen los candidatos de las tres grandes coaliciones electorales, con el fin de generar los insumos necesarios para guiar una decisión que con seguridad cambiará el rumbo del país.

Referencias:

“Plataforma Electoral 2018”, Coalición “Por México al frente”, <http://ricardoa-naya.com.mx/wp-content/uploads/2017/12/Plataforma8DIC-FINAL.pdf> (Consultada el 20 de marzo de 2018).

“Plataforma Electoral y Programa de Gobierno 2018- 2024”, de la Coalición “Todos por México”. <http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94386/CGex201801-5-rp-unico-a2.pdf> (Consultada el 20 de marzo de 2018).

“Proyecto Alternativo de Nación 2018 - 2024 Plataforma Electoral y Programa de Gobierno” <http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94367/CG2ex201712-22-rp-5-2-a2.pdf> (Consultado el 20 de marzo de 2018).

Para una versión más larga consultar “Proyecto de Nación 2018 – 2024”, de la Coalición “Juntos haremos historia”. <https://drive.google.com/file/d/1UwBfA6aW1vyqyPzI2NxZ177yc8IKk6wc/view> (Consultado el 20 de marzo de 2018).

comparo voto:

PROYECTO CIUDADANO PARA CONOCER CANDIDATURAS

COMPARO VOTO es una plataforma diseñada por ciudadanos para que las personas interesadas interactúen y aprendan sobre civildad, democracia y derechos político-electoral. Además se puede conocer en pocos minutos a los candidatos a gobernador y presidente de la república del proceso electoral 2018.



El proyecto está dirigido principalmente a **1. Millennials; 2. Estudiantes universitarios; 3. Mexicanos en el extranjero y 4. Personas con estudios de nivel medio superior.**

La plataforma utiliza un algoritmo inteligente que permite realizar comparaciones entre diversa información sobre los candidatos. Por ejemplo, formación académica, profesional y propuestas de campaña, entre otros elementos de manera interactiva, a fin de que los ciudadanos puedan conocerlos, contrastarlos y decidir así su voto de manera informada.

Fue desarrollado por el Centro de Análisis para la Investigación en Innovación.

LAS ELECCIONES EN VERACRUZ EN 2018

Alberto J. Olvera
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Como es sabido, Veracruz sufre aún las consecuencias devastadoras de dos sexenios de gobierno que destruyeron por completo la de por sí escasa institucionalidad estatal, construyeron un régimen subnacional autoritario y dejaron a la entidad en una completa postración fiscal, moral y política. Casos comparables solo son los de Chihuahua y Quintana Roo, donde también jóvenes gobernadores sátrapas abusaron del poder con fines personales, cubriéndose las espaldas con el apoyo ilegal que prestaron a las campañas electorales del PRI, tanto a nivel local como nacional, en los calamitosos años de la alternancia en el gobierno federal.

La configuración de un régimen autoritario subnacional en Veracruz

Es importante caracterizar correctamente el tipo de régimen político que se desarrolló en varias entidades del país en este incierto periodo. Se configuraron lo que Eduard Gibson llama “regímenes autoritarios subnacionales”, es decir, regímenes estatales formalmente democráticos, pero cuya práctica política es autoritaria, que convivieron con un régimen nacional relativamente democrático, en tanto tiene todavía frente a sí otros poderes que limitan a la presidencia.



Fidel Herrera en la toma de posesión de Javier Duarte.
Foto de Yahir Ceballos.



En efecto, los dos gobiernos federales panistas y el actual del PRI han tenido un relativo equilibrio en el Congreso y las instituciones autónomas (por más deficiente que este control haya sido), y ante todo, han tenido que lidiar con la fragmentación del poder derivada de la pérdida de centralidad del presidente de la república. En este periodo los gobernadores se empoderaron en tanto ya no tuvieron que disciplinarse ante el presidente ni lidiaron con controles legislativos locales y órganos autónomos eficaces.

Fidel Herrera y Javier Duarte controlaron al congreso local mediante el sencillo expediente de la compra de diputados de oposición, método que por cierto el actual gobernador Miguel Angel Yunes ha

continuado con singular energía. Ambos gobernadores controlaron absolutamente a los procuradores de justicia y el poder judicial, así como a los órganos formalmente autónomos. Dado que las transferencias de fondos federales a los municipios pasan primero por la tesorería estatal, los gobernadores aprovecharon esa intermediación para controlar a los alcaldes. Finalmente, los dos personajes violaron cínica y abiertamente todas las regulaciones de aplicación y de comprobación de fondos federales transferidos a los estados en la más completa impunidad, aprovechando que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto requerían de sus servicios políticos, sea para negociar o controlar el crimen organizado, sea para ganar elecciones ilegalmente.

Lo peor de este proceso fue que Fidel Herrera, para ganar su elección en 2004 hizo un pacto con el crimen organizado, lo cual le permitió financiar parcialmente su campaña electoral. A partir de entonces, los zetas se apoderaron del estado, y sólo a partir de 2011 el gobierno federal -y parcialmente el estatal- combatieron a dicho grupo con la ayuda de otro cartel que ahora controla el centro de la entidad.

Es en ese contexto que se produjo en 2016 la primera alternancia en el poder de la historia veracruzana. Miguel Angel Yunes Linares ganó, bajo las siglas del PAN, la gubernatura del Estado y 39% de las diputaciones locales en alianza con el PRD. Yunes fue el beneficiario de un voto de castigo contra el PRI por parte de una ciudadanía hastiada de la inseguridad y la violencia, la corrupción más descarada y desmedida, la inoperancia del gobierno y la parálisis económica.

La sorpresa de esa elección fue el tercer lugar de Morena, que competía por primera vez en elecciones locales en el estado, lo cual le permitió ganar cinco distritos de mayoría y posicionarse fuertemente en la zonas petroleras del sur y norte de la entidad, así como en la zona metropolitana de Xalapa.

Sin embargo, en las elecciones municipales celebradas en 2017, la alianza PAN-PRD se hizo de la mitad de las 202 alcaldías, mientras que Morena obtuvo una decena de triunfos, incluyendo la capital y municipios de la zona conurbada, así como las ciudades petroleras en Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica. El PRI quedó reducido a un lejano tercer lugar, perdiendo casi por completo su poder territorial.

Opciones electorales en el terreno local

Las elecciones de 2018 reconfigurarán un congreso en el que el PAN ha logrado alcanzar una mayoría artificial mediante la compra y coacción de diputados priístas, morenistas e independientes, y definirán quién gobernará Veracruz por los próximos seis años, después de este absurdo mini período de dos años en el que Miguel Angel Yunes no ha logrado consolidar plenamente su poder ni revertir la espiral de violencia y delincuencia que la entidad vive, ni mucho menos salir de la dramática recesión que padece la entidad.

Sin embargo, debe reconocerse que el clima político, a pesar de ser abiertamente confrontativo, muy al estilo de Yunes, no tiene ya el carácter ominosamente autoritario que le imprimieron los gobiernos priístas. Se ha logrado también la estabilización económica y

política del Estado, todo ello de manera precaria, pues la crisis fiscal no tiene solución a la vista ni es posible atraer inversión privada a un estado cuya infraestructura está destruida y en el que la violencia y la delincuencia aún son generalizadas.

La contienda se dará entre Miguel Angel Yunes Junior, a quien el actual gobernador pretende heredar el poder -y cuenta por tanto con todo el apoyo del aparato estatal-, Cuitláhuac

García, candidato de Morena que ya lo fue también hace dos años, y quien proviene en las bases locales del partido, y José Yunes Zorrilla, senador del PRI, quien ya antes intentó ser candidato del otrora partido oficial. Las tendencias preliminares apuntan a una elección polarizada entre el candidato del PAN-PRD y el de Morena, con el PRI situado en un lejano tercer lugar, incluso con el riesgo de no ganar ningún distrito por mayoría, lo cual conduciría al partido a la irrelevancia política.

La elección veracruzana será, como todas en nuestro tiempo, una lucha de aparatos electorales. La alianza PAN-PRD funciona ya como un partido oficial que hace uso abierto de las políticas públicas y del poder estatal para apoyar a su candidato; Morena cuenta con el descontento de la ciudadanía ya no sólo contra del PRI, sino también contra el actual gobierno que en realidad no ha podido solucionar los problemas de fondo de la entidad. Sin embargo, Morena carece de la implantación territorial necesaria para defender el voto y evitar el abuso por parte del gobierno estatal en la elección local, y del gobierno federal en la elección presidencial. El PRI, por su parte, carece de recursos locales para competir, pero al parecer dispondrá de un desesperado apoyo del gobierno federal para tratar de que su derrota sea lo menos drástica posible y evite que la votación por López Obrador sea masiva en el estado que tiene todavía el tercer padrón electoral más importante del país.

Gobierno Federal

PAGA CASI MIL MILLONES A FIRMAS FANTASMA

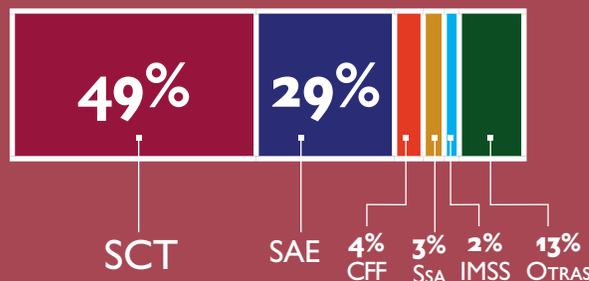
UN REPORTE DEL PERIÓDICO REFORMA, basado en datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), señala que el Gobierno federal ha pagado 963 millones de pesos de dinero público a empresas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasificó de fantasmas.

Los resultados se obtuvieron al analizar 700 mil procedimientos registrados en Compranet de 2012 a 2016. El monto se distribuyó entre 127 firmas boletinadas en el Diario Oficial de la Federación por la realización de obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos.

A una empresa fantasma, el SAT le comprueba la emisión de comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan sus comprobantes. Puede tratarse también de empresas meramente de papel o de firmas que registran cierto tipo de actividad sin que puedan justificar el volumen de operaciones registrado.

El reporte detalla que “entre las más beneficiadas hay empresas ligadas a políticos del PRI y del PRD e incluso a un exdirigente de la CNTE”.

EMPRESAS QUE MÁS RECURSOS DESTINARON A EMPRESAS FANTASMA



Fuente: Imco en Reforma.

JALISCO A VOTACIÓN: LA DISYUNTIVA ENTRE LO QUE QUEREMOS Y LO QUE HAY

Francisco Franco

COORDINACIÓN PROYECTO FORTALECIMIENTO SISTEMA LOCAL DE
PREVENCIÓN CORPORATIVA DE FUNDACIONES A.C.

Las precampañas dejaron una estela enorme de insatisfacción e incertidumbre que se ha replicado en todos los ámbitos, tanto en los estatales como en los municipales. A nadie le es extraño pensar que lo que vimos en esta primera etapa fue la amarga antesala de un proceso de campañas electorales que prometen volver a estar (como cada tres y seis años) por debajo de las expectativas ciudadanas, carentes de propuestas articuladas y por supuesto llenas de descalificaciones y guerra sucia.

Nos debe preocupar como ciudadanos de que los candidatos de las principales fuerzas políticas del país hayan surgido de procesos internos poco democráticos, que terminaron por quebrar a los partidos para crear frentes políticos mezclados con la única intención obtener el máximo puesto de poder que existe: la presidencia de la República.

Lo que está en juego en 2018 no tiene que ver solamente con puestos y cargos políticos. Los partidos, sus dirigentes y sobre todo sus candidatos han obviado hasta el momento la importancia de crear una visión que conduzca a un México lleno de problemáticas tan

complejas a un lugar mucho más próspero, pero fundamentalmente certero.

Recorriendo todo lo sucedido desde 2016 a la fecha, y posiblemente todo lo anterior a ese año, nos dimos cuenta que el panorama de algunos estados fue de total incertidumbre política. La oleada de casos de gobernadores que corrompieron sus propios sistemas gubernamentales para dar paso a estrategias corruptas de enriquecimiento y desvío de recursos públicos, dejó entrever que existe una serie de complicidades en diferentes escalas que no pueden darse si no es con el apoyo de muchas personas que también se

ven beneficiadas y que provocan una cadena de favores que deja a su paso un importante derroche de dinero. Pero eso, por el momento, es harina de otro costal.

Lo que creo que es importante comprender de esos casos de corrupción es que los gobiernos estatales son hoy por hoy unidades político-administrativas mucho más complejas, de mayor poder y ende de mayor alcance, pero que han quedado al margen de la auditoría correspondiente, o por lo menos de una supervisión medianamente exhaustiva que no permita el desarrollo de redes de corrupción. Pero nuevamente, eso sigue siendo harina de otro costal.

Las opciones para elegir

El primer punto que quiero abordar es el de la trascendencia que tiene elegir un gobernador. Para el caso de Jalisco, uno de los 32 estados de la república mexicana, es de suma importancia que en esta elección exista una persona con visión de diálogo y sobre todo de querer desarrollar un trabajo multisectorial para resolver temas tan complejos como la pobreza, el desempleo, el desorden urbano, la corrupción y, por supuesto, la violencia.

En Jalisco, a diferencia del panorama nacional de frentes y alianzas electorales, la disputa por la gubernatura se dará sin toda esta pa-



En Jalisco, la única coalición que se registró es la de Juntos Hacemos Historia y el resto de partidos lanzó a candidatos propios.

rafernalía, a excepción de la llamada coalición Juntos Hacemos Historia formada por MORENA, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, en la cual su candidato será Carlos Lomelí Bolaños. Por su parte Movimiento Ciudadano registró a Enrique Alfaro Ramírez como su contendiente, mientras que el PRI lanzará a Miguel Castro Reynoso y el PAN a Miguel Ángel Martínez Espinosa. En el registro ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) también existen otros candidatos, por el PRD, Carlos Orozco Santillán; por Nueva Alianza, Martha Rosa Araiza Soltero y por el PVEM, Salvador Cosío Gaona.

Existen, sin embargo, dos figuras que destacan en esta contienda y que parecen ser las de mayor relevancia para alcanzar la gubernatura del estado. Por un lado está Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, quien fuera recientemente presidente municipal de Guadalajara y anteriormente de Tlajomulco, y que desde 2012 buscó la gubernatura con este mismo partido, pero perdió ante el candidato del PRI y actual gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Por otro lado, está Miguel Castro quien hasta hace unos meses fuera el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) y anteriormente ocupara ya en dos ocasiones la presidencia municipal de Tlaquepaque por el mismo partido que hoy lo nomina.

La visión para Jalisco no está clara. Tanto Enrique Alfaro como Miguel Castro tienen altas posibilidades para convencer al electorado jalisciense, esto sin contar que alguno de los otros candidatos pueda dar una sorpresa inesperada en los próximos meses; sin embargo, las problemáticas actuales de un estado como Jalisco han tomado rumbos lo suficientemente difíciles para complejizar aún más el panorama que vivimos y, por tanto, cualquier candidato a ocupar el máximo puesto político dentro del estado deberá presentar una ruta real y viable para atender estos problemas.

Los retos que impone la violencia en Jalisco

En especial quiero enfocarme en un problema que día con día se agudiza más: la violencia. Como uno de los ejemplos más recientes quiero mencionar que a principios de marzo, se registró en Jalisco una ola de violencia en la que, en menos de 12 horas, hubo 17 personas que fueron asesinadas en manos de grupos delictivos. Este acto se vino a sumar a muchos otros que han acumulado la vida de miles de personas en los últimos años.

Para el estado de Jalisco en 2017, la tasa de víctimas fue de 30,939 por cada cien mil ha-

bitantes en población de 18 años y más², mientras que la tasa de delitos fue de 41,874 delitos por cada cien mil habitantes. Los delitos más recurrentes en la entidad fueron los de extorsión, fraude y robo total o parcial de vehículo.

De manera muy reciente, hace una semana en el estado se registró la desaparición de cuatro jóvenes, de los cuales uno fue encontrado sin vida y los otros siguen sin aparecer; la Fiscalía General del Estado sigue sin tener rastro de su paradero.

La sociedad jalisciense está cansada. El sábado 24 de marzo se hizo una toma simbólica de la glorieta de los Niños Héroe en Guadalajara por parte de ciudadanos que pedían paz, respuestas y por supuesto que regresaran estos y los otros tantos desaparecidos. Hoy ya no es más la glorieta de los Niños Héroe, sino la glorieta de las y los desaparecidos.



Foto de El Informador/ M. Vargas.

Es un llamado urgente el que como sociedad tenemos hacia las autoridades y desde luego a los candidatos que pretenden gobernar el estado. No son sólo los homicidios, los robos y las desapariciones, se trata de la tranquilidad de caminar por las calles, de que exista atención y justicia para las víctimas y ciertamente del derecho que tenemos a una vida libre de violencia.

Insisto, el panorama jalisciense en el que actualmente vivimos no sólo se trata de violencia sino también del combate a la pobreza y la marginación, el desarrollo económico que derive en más empleos, el crecimiento urbano que esté en equilibrio con la naturaleza y los temas de justicia y combate a la corrupción. Si lo vemos desde el paradigma

² ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA (ENVIPE)2017. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf

de la complejidad estas situaciones problemáticas se presentan todas a la vez y cada una de ellas es multifactorial y a su vez tienen una cierta interrelación en un círculo vicioso del cual es difícil salir.

La sociedad civil organizada de Jalisco entiende lo complejo del panorama y lo difícil que es actuar de manera aislada para resolver los temas de manera independiente, por ello es importante remarcar que existen esfuerzos que buscan fomentar el diálogo y no deben ser ignoradas por parte de las autoridades. Ejemplo de ello es lo que el colectivo de organizaciones llamado “Tómala” realizó en semanas anteriores en un informe que presentó en conjunto con otras organizaciones sobre temas como: desigualdad, equidad sustantiva, movilidad, derechos humanos, participación ciudadana, paz, designaciones públicas, transparencia y rendición de cuentas y seguridad y prevención. En todos y cada uno de estos temas, diferentes organizaciones participaron dando su informe acerca de

los resultados que se han obtenido y cómo estos no concuerdan con los informes oficiales del gobierno en turno.

Es ahí donde vemos que falta un proceso real de construcción y diálogo que deseáramos los gobiernos locales entendieran. Las organizaciones de la sociedad civil podemos aportar en mucho para un proceso democrático y de desarrollo conjunto de estrategias viables y aun cuando exista el riesgo de politizar el diálogo, creemos que es necesario para llegar a acuerdos trascendentales.

¿Cuál será entonces el papel de la sociedad civil organizada en estas elecciones? Sin duda alguna el de concientizar a los ciudadanos a conocer y exigir propuestas a los candidatos que suban el nivel de las elecciones, que se visibilicen los temas espinosos dentro de sus agendas de trabajo y que se propongan tener un diálogo abierto y constante entre los diferentes actores para que todos aporten desde lo que hacen.

La invitación está hecha tanto para ciudadanos, gobiernos, activistas, organizaciones, universidades y empresarios, todos necesitamos aportar a un diálogo que sobrepase los problemas y que nos permita crear estrategias hacia el futuro.

MÉXICO ES MÁS IMPUNE QUE HACE DOS AÑOS:



igi-mex 2018

SEGÚN DATOS DEL ÍNDICE GLOBAL DE IMPUNIDAD MÉXICO 2018, nuestro país es más impune que hace dos años y el cuarto con más impunidad a nivel global. El estudio, publicado por la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP), mide estadísticamente los grados de impunidad de distintos países, así como al interior de cada uno de ellos.

A CONTINUACIÓN, ALGUNOS RESULTADOS RELEVANTES DEL REPORTE:

En comparación con el último reporte, Aguascalientes (+7.48%), Tlaxcala (+7.37%) y Nayarit (+6.65%) son los estados en donde aumentó más el nivel de impunidad.

El **Estado de México (Edomex)** es la entidad más impune del país, con una calificación de 80.06. Le siguen Tamaulipas, Baja California, Coahuila y Quintana Roo, con puntuaciones de 78.88, 78.08, 77.88 y 77.33 respectivamente.

En el Estado de México se registraron 202,205 carpetas de investigación, pero solo 1,209 sentenciados en primera instancia. Esto quiere decir que **apenas el 0.59% de las carpetas culminó en una sentencia**. Aunado a esto, solo 8.33% de las carpetas se convirtieron en causas penales. Además, se trata de la segunda entidad con más delitos no denunciados del país.

Solo dos estados mostraron una disminución significativa en sus niveles de impunidad: Morelos, con una reducción de 5.84 puntos, y Campeche, con una reducción de 2.16 puntos.

El homicidio no se castiga en México. El porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas bajó de 27.5% a 17.09%. La disminución de casi diez puntos porcentuales de este indicador es resultado de los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal: las entidades no tienen agencias de investigación profesionales independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio.

ELECCIONES PARA GOBERNADOR EN PUEBLA 2018, EL PENDIENTE DEMOCRÁTICO

Marco Domínguez Sánchez³

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

El periodo de intercampana para la gubernatura poblana se convirtió en el punto de llegada de un ciclo que inició en 2011 y concluyó con la definición de cinco candidatos a la gubernatura: Martha Erika Alonso Hidalgo, ex titular del DIF estatal en el periodo 2011-2017, candidata del Frente por Puebla; Enrique Doger Guerrero, nominado por el Partido Revolucionario Institucional; Luis Miguel Barbosa Huerta, postulado por Morena, el Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social; Alejandro Romero Carreto, candidato del Partido Nueva Alianza y Michel Chaín Carrillo, cuyo registro corrió a cargo del Partido Verde Ecologista de México.



³ El autor es filósofo, se desempeña como profesor de carrera de la Facultad de derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Contacto: marco1644@yahoo.com.mx

En Puebla se arriaron banderas democratizadoras a cambio del impulso de un proyecto presidencial que a la postre fue derrotado.

El ciclo bien podría denominarse etapa perdida de la democratización regional. No es menor el asunto. En Puebla se arriaron banderas democratizadoras a cambio del impulso de un proyecto presidencial que a la postre fue derrotado. Dicha pretensión acabó con la esperanza de cambio de régimen en Puebla. El proyecto devino en el empoderamiento de una elite política cuyos resultados en la gestión gubernamental no necesariamente corresponden a los intereses de la sociedad y sí, en cambio, a la intención de extender su dominación un sexenio más.

Por ello, a pesar del número, en realidad son dos quienes realmente compiten, a saber, Martha Erika Alonso Hidalgo y Luis Miguel Barbosa Huerta.

La esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas fue registrada como candidata de cinco partidos -Acción Nacional, De la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, anexos se anotaron dos agrupaciones locales de inocultable filia y origen gubernamental, el Partido Social de Integración y el Partido Compromiso con Puebla. Contienen bajo el nombre de Por Puebla al

Frente. En la órbita del oficialismo local giran Romero Carreto y Chaín Carrillo. No harán campaña o bien acabarán declinando por la ex Secretaria General del Comité directivo Estatal del PAN. El primero es un notario que no ha incursionado como actor político. El segundo ha sido funcionario municipal y estatal de primer nivel con Antonio Gali Fayad, actual gobernador. Pertenece al núcleo duro del morenovallismo. La postulación de ambos se encuentra dirigida a crear un golpe mediático adhiriéndose a la candidata Alonso Hidalgo. Hay sobradas razones para ello. Durante los dos gestiones estatales, las dirigencias locales del Panal y el Verde participaron sea en el ejecutivo o bien desde la cámara de diputados poblana. No hay evidencia de que su bancada haya votado en contra de las iniciativas del gobernador en turno.

El caso del exrector universitario, Enrique Doger Guerrero, es similar. Su postulación se explica en razón de una estrategia de contención del candidato de Morena. Hará las veces de opositor crítico para restar votos opositores. Su función es impedir que el candidato de Morena concentre la votación opositora, incluso y sobre todo la de su partido.

Como se señaló, aunque el periodo de intercampaña arrojó oficialmente a cinco, son dos los candidatos reales: Martha Erika Alonso Hidalgo que representa la

continuidad de la actual elite en el poder y Luis Miguel Barbosa Huerta, quien se convirtió en polo de atracción del segmento electoral partidario de alternancia en el gobierno estatal. ¿Qué apoya esta afirmación? La precampaña de Morena con un buen número de eventos masivos, lo que indica el crecimiento no solo de una potencial base electora sino la ampliación de la estructura electoral cuyo punto de partida era, hasta hace poco tiempo, excesivamente básica; las adhesiones públicas de personajes de diversos partidos, especialmente del PRI, que representan liderazgos fuertes en los municipios poblanos; y, con las reservas del caso, los datos que arrojan diversas casas encuestadoras que muestran un ascenso vertiginoso en la intención del voto a favor del candidato de Juntos Haremos Historia.

¿Cómo se llegó a este escenario de polarización? ¿Por qué el hoy candidato a gobernador de Juntos Haremos Historia, muy temprano, se volvió competitivo al grado de amenazar seriamente las posibilidades de continuidad de la elite local?

Hay factores relevantes: en 2010, cuatro partidos - PAN, Convergencia, Nueva Alianza y PRD- confluyeron en una coalición antiautoritaria y pretendidamente democratizadora. Alentados desde la presidencia de la república, la alianza electoral Compromiso por Puebla postuló a Rafael Moreno Valle Rosas como candidato a la gubernatura poblana. El proyecto tenía como horizonte des-instaurar los enclaves autoritarios estatales en Puebla, Sinaloa y Oaxaca. El modelo fue exitoso. El PRI perdió en los tres estados.

En el caso de Puebla, el sexenio de Felipe Calderón alcanzó para establecer condiciones de gobernabilidad con todas las fuerzas partidarias, incluso con el Revolucionario Institucional. La bancada estatal del PRI en el congreso local fue obsequiosa con Moreno Valle. De facto se amplió la coalición gubernamental. No es desmesurado afirmar que el cambio del entramado constitucional local, (centralización del ejecutivo estatal de los recursos, incluso municipales, vía otorgamiento de adquisición de obras desde las oficinas gubernamentales estatales) consolidó a una elite que fue capaz de atraer hacia su vértice a todos los partidos políticos.

Al perder el PAN la presidencia de la república en 2012, la agenda local se orientó por entero a construir la candidatura presidencial de Moreno Valle. El horizonte de toda la ad-

ministración se enfocó a trabajar en pos de dicha pretensión. La suntuosa obra pública, publicitada en medios locales, nacionales y en redes alabó al paroxismo la gestión del ex gobernador poblano, creando en el imaginario de la sociedad mexicana un falso consenso estatal en torno a su figura. El efecto fue la contención del pluralismo político y la desaparición de todo tipo de dispositivos de control que la oposición tendría que haber defendido.

Ello explica que en 2017 dicha elite haya conservado la gubernatura. Nadie les disputó el poder. Incorporaron corporativamente a sus adversarios priístas; la prensa fue objeto de controles para limitar e incluso inhibir las voces críticas; consolidaron el control del congreso local, lo que permitió reformar la constitución, una vez más, para mantener dominio transexenal de la Fiscalía General del Estado, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla y de los órganos locales electorales. Todo un homenaje al viejo autoritarismo.

Más aún, promovieron reformas electorales locales para empatar con el proyecto transexenal del poder. Aprovechando la orientación para empatar elecciones, modificaron la constitución poblana para instalar un ejecutivo de un año con ocho meses y extender los gobiernos municipales y el periodo de la cámara de diputados estatal de tres a cuatro años con ocho meses.

Las reformas locales, especialmente aquella que rompió el ciclo sexenal, aparte del deficitario ejercicio gubernamental en relación al costo-beneficio, desgastaron sobremanera a las instituciones. Ni el que terminó acaba de entregar, ni el que llegó termina por asumir. Dicha circunstancia provoca verdaderos vacíos de poder. Por ejemplo, a un año, el actual mandatario enfrenta la dualidad de funciones que significa mantener una burocracia transexenal más atenta y ocupada con las próximas elecciones que con el interés público. Los resultados de la gestión aliancista no son los mejores. Si de por sí los negativos que arrastra la elite moreno vallista en seguridad y déficit democrático son altos, el señalamiento de la delincuencia organizada en todo el estado es una verdadera adversidad.

La hegemonía alcanzada por los blanquiazules de Moreno Valle se fracturó al emerger como opositor uno de los actores otrora baluartes del control gubernamental. El rompimiento del exsenador con el PRD y en el acto con el morenovallismo, ha elevado los costos de continuidad. La elección no será tersa y de consenso inducido.

En un tiempo record, Barbosa Huerta se convirtió en polo de atracción de los agraviados y ofendidos por la elite gubernamental. Su candidatura se encuentra en franco crecimiento por el descontento de actores sociales que

ven en el actual proceso, el tiempo de cobrar agravios. Su potencialidad como alternativa se nutre de la idea en el imaginario social de la pretensión de una reelección disfrazada de Rafael Moreno Valle Rosas a través de la candidata del Frente Por Puebla. El morenista, además, cataliza el descontento derivado de la incapacidad del gobierno estatal por contener la violencia delincinencial en amplias zonas del territorio poblano. Lo anterior se encuentra asociado al innegable efecto del crecimiento electoral de Andrés Manuel López Obrador.

En territorio poblano la agenda electoral comprende 220 municipios, 26 diputaciones estatales, 15 distritos federales, dos senadurías de mayoría, la principal batalla. Sin embargo la batalla principal es por Casa Puebla, asiento del poder ejecutivo estatal.

El grupo gobernante, a diferencia de sus opositores, se juega la existencia misma como factor de poder estatal. Si de por sí dicho grupo proviene de una derrota interna al interior del PAN, el paisaje para ellos no pinta nada bien. Se aprestan a defender su único baluarte de poder real y lo hacen solo con actores políticos que perdieron base social cuando migraron a la función gubernamental. Si bien ello constituye un factor significativo para competir, es insuficiente. Operan en contra los efectos del acelerado desgaste de la función pública, la poca empatía con el

candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés y la pérdida del horizonte democrático que prometieron a los poblanos en 2011.

De perder la gubernatura, se convertirán en parias al interior de Acción Nacional. El problema central que tiene Marta Erika Alonso Hidalgo es que su partido, en Puebla, desperdió la oportunidad de oro para concluir democráticamente la alternancia. En vez de aprovechar el consenso y la sumatoria plural exitosa de 2010, navegaron a contrapelo de las aspiraciones de la sociedad al pretender reinstalar una cabeza de playa autoritaria con proyección nacional. Hoy el proyecto de la continuidad en Puebla se encuentra en entredicho y seriamente amenazada.

En un escenario positivo para ellos, de todas maneras, la emergencia del bloque opositor obligará a construir una agenda incluyente.

En suma, nos encontramos, en el cierre del ciclo que pasará a la historia como el periodo del autoritarismo tardío del sistema político poblano.

PRONUNCIAMIENTO CIUDADANO SOBRE LAS CANDIDATURAS

Observatorio Ciudadano en Defensa de la Constitución Política de la Ciudad de México

¿Cómo avanzar en un proyecto de Ciudad para todas y todos que rechace la participación política con fines patrimoniales personales y de grupo?



El Observatorio Ciudadano en Defensa de la Constitución Política de la Ciudad de México hace un llamado a los partidos políticos para que, con base en programas claros de gobierno para la Ciudad, propongan a candidatas y candidatos para el próximo Congreso Local comprometidos con el cumplimiento del contenido de la Constitución Política de la Ciudad de México. Recordemos que el texto Constitucional es resultado de la reflexión y de las propuestas de actores destacados de la Ciudad, e inclusive del país, con aportaciones importantes de la ciudadanía y de organizaciones sociales, económicas y civiles. Contiene derechos y disposiciones cuya aplicación es imprescindible para la vida democrática de la Ciudad.

Nos encontramos ante un panorama político y social desesperanzador, ya que temas de gran trascendencia como la participación ciudadana, el acceso al suelo, el derecho al agua, el uso del espacio público, el desarrollo urbano, la reconstrucción necesaria después del sismo, y la seguridad, entre otros, han quedado diluidos en medio de intereses particulares que se han manifestado tanto desde el servicio público como desde las pre candidaturas para distintos puestos de elección popular.

Ejemplo claro de ello son personajes con una trayectoria carente de ética y honestidad en la vida política de la Ciudad, que ahora se prestan en cualquier partido o coalición que se los permita a saltar del Congreso Federal al Congreso Local o a las Alcaldías y que desconocemos cuál será el proyecto o la posición ideológica con la que participarán de ser electas o electos.

La carencia generalizada de referentes políticos y éticos hace temer que las próximas candidaturas no estén orientadas por la preocupación de las demandas ciudadanas, sino por el aprovechamiento para beneficio personal de los recursos y puestos públicos. No debe ser poca la ciudadanía que observa azorada las propuestas que están haciendo las tres coaliciones y los partidos políticos para las próximas elecciones dado el cono-

cimiento que tienen de conductas previas carentes de ética de varios de los candidatos y candidatas incluidos

Las propuestas conocidas hasta el momento, no hacen sino ampliar las dudas sobre por quién votar, no votar o anular el voto. Además, levantan grandes dudas sobre la conformación que tendrán las Cámaras Federales y el Congreso Local en términos de proyecto de país y de posturas frente a los diversos y complejos temas en la agenda Legislativa que tendrá que definirse en los próximos años. Adicionalmente serán órganos en donde sus integrantes tendrán por primera ocasión la posibilidad de reelegirse.

Por lo anterior, es imprescindible que los partidos políticos impulsen a personas que estén alejadas de prácticas corruptas y abusivas, que puedan orientar a la Ciudad a mejores condiciones de desarrollo, que cuenten con el conocimiento de su compleja problemática, que estén dispuestas al manejo pulcro y transparente de los recursos públicos, así como a trabajar con la ciudadanía y no a sus espaldas.

Como Observatorio exhortamos a quienes tengan la intención de ocupar algún cargo en el ámbito público de la Ciudad de México y en su representación a expresar su compromiso con la defensa, el respeto y la aplicación de su Constitución Política.

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2018

<https://observatorioconstitucioncdmx.wordpress.com/>

Correo electrónico: observatorioconstitucion@gmail.com

VOTO EN EL EXTRANJERO Y LA AGENDA MIGRANTE

Daniel Tacher

INICIATIVA CIUDADANA PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL
DIÁLOGO A.C.

La Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo desarrolló una campaña de promoción del registro de votantes en Estados Unidos llamada *¡Actívate y Vota! Es tu derecho*. Esta campaña incluyó el desarrollo de foros cívicos cuyo objetivo fue establecer un espacio de diálogo entre la comunidad mexicana en Estados Unidos, autoridades electorales y representantes de las coaliciones electorales.



En la mesa principal, de izquierda a derecha, Frida Ramírez y Jorge Herrera, beneficiarios de DACA y egresados de UCLA, Juan José Gutiérrez de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, Raúl Murillo, de Hermandad Community Centers, Ángela Sanbrano, de la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes y Raúl Hinojosa, profesor de UCLA. En el podio, el consejero del INE, Enrique Andrade.

Consideramos el principio que la participación ciudadana en los procesos electorales es el punto central. Garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a decidir es una de las tareas centrales de las instituciones electorales. Las garantías procedimentales deben enfocarse en establecer un registro universal de electores, mecanismos y procedimientos accesibles para la emisión del voto, métodos que garanticen la secrecía del voto y medios para garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, estas garantías no son suficientes. La participación también está vinculada a las expectativas y a la representación de los votantes en los espacios de toma de decisiones.

Las agendas y plataformas políticas moldean las decisiones de los electores e impulsan (o desincentivan) la participación. Por ello no basta con garantizar mecanismos para el ejercicio del voto, también es indispensable contar con representación que refleje la pluralidad política.

Para la población mexicana residente en el extranjero, la garantía de ejercer su voto tiene una historia reciente, no así la lucha por alcanzar estas garantías. A nivel federal se ha reformado la legislación para garantizar el ejercicio al voto desde el extranjero. Se han actualizado medios para mejorar el registro de los electores. Sin embargo, aún ha quedado pendiente contar con representantes de esta comunidad, aunque puedan estar incorporadas sus problemas de agenda en las plataformas políticas.

En el proceso electoral de este año, al menos en el proceso de precampañas e inter-campañas, donde los partidos políticos han registrado tres coaliciones electorales y se presentaron aspirantes a obtener candidaturas independientes. En este mosaico de actores que buscan ganar la presidencia de México no se ha presentado una agenda clara y precisa dirigida a quienes residen fuera del país.

A pesar del aporte social, cultural y económico de la comunidad mexicana en Estados Unidos para las dos naciones, tanto en México como en Estados Unidos sus gobiernos y políticos se niegan a reconocer este valor e incluso están enfocados a destruir su valor.

Por ello, ante el vacío que existe de propuestas concretas de agenda para atender las necesidades de la comunidad mexicana

en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, desde Iniciativa Ciudadana impulsamos el diálogo entre la comunidad mexicana y las coaliciones electorales registradas. Nuestro objetivo fue visibilizar el vacío en la agenda para incorporar las necesidades de esta gran comunidad y establecer un medio para presentar esta agenda desde la comunidad. No esperar más las respuestas de las coaliciones y sus candidatos. Impulsar esta agenda desde la misma comunidad.

Por primera vez se realizó un diálogo en los Estados Unidos, donde reside el 98% de los mexicanos en el extranjero. En las instalaciones de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y con la cobertura en directo de Univisión, representantes de la comunidad presentaron seis temas base para la construcción de una agenda ciudadana binacional:

1. **Protección y Seguridad Jurídica:** Que se amplíe la red de protección consular, rebasada en la actualidad, y la definición oportuna de un programa que atienda “el grave peligro que vivimos ante el endurecimiento de la política migratoria con carácter xenófobo en contra de la comunidad mexicana”.
2. **Mediación por una Reforma Migratoria Justa y Humana:** Que los aspirantes a que se definan abiertamente para apoyar a la comunidad mexicana ante el Congreso y gobierno de Estados Unidos para que se reforme el sistema migratorio y se regularice la situación de millones de personas indocumentadas.
3. **Empleo y Capacitación Laboral:** Se exige a los candidatos presidenciales que cuenten con programas de fortalecimiento a las capacidades laborales, con enfoques binacionales que robustezcan el aporte que los mexicanos realizan a las economías de ambos países.
4. **Atención al retorno forzado.** Se requieren programas inmediatos y viables para apoyar el retorno forzado de millones de familias, debido

a la amenaza de Donald Trump de deportar a más de tres millones de trabajadores mexicanos indocumentados, y atender la posible deportación de unos 800,000 jóvenes amparados por el programa DACA, de los cuales el 79% son de origen mexicano.

5. Fortalecimiento del Estado de Derecho en México: En los últimos años, el contexto de la violencia, corrupción e impunidad han agravado la situación de salida de mexicanos, por ello necesitamos un país libre, democrático, con oportunidades de desarrollo y en paz; por ello exigimos que se consolide el sistema nacional anticorrupción y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con instituciones sólidas y un auténtico Estado de Derecho.
6. Voto Efectivo y Representación de los Migrantes Mexicanos: Los complejos mecanismos establecidos para el ejercicio de los derechos



De izquierda a derecha, Fernando Belauzarán, de la coalición Por México al Frente, Héctor Vasconcelos, de la coalición Juntos Haremos Historia y, en la conducción, el periodista León Krauze.

políticos de los mexicanos que residen en el extranjero impiden su pleno y efectivo desarrollo, además ausencia de representación para 36 millones de personas e impedimentos para establecer diálogos abiertos sobre las plataformas políticas partidistas como limitación al pleno ejercicio del derecho políticos.

La participación de representantes de las coaliciones electorales en un diálogo ante la comunidad mexicana en Estados Unidos fue un primer paso para visibilizar una agenda ausente. El desarrollo de esta agenda aún sigue pendiente. Es necesario que los candidatos expresen su posición. Son tiempos de definición que requieren respuestas claras.

Cuestionar la baja participación de quienes residen en el extranjero sin reconocer que solamente se ha centrado la atención en el derecho a votar, pero no a garantizar la representación política y programática de quienes viven en el extranjero, limita entender la compleja realidad del ejercicio de los derechos políticos.

El proceso en curso nos mostrará las deficiencias de un sistema político que no ha mirado a los ciudadanos. Un sistema que ha provocado la salida de millones de mexicanos ante la falta de oportunidades y salarios dignos. Pero también puede ser un momento para presentar agendas de solución. Es necesario que desde la sociedad civil se construyan alternativas para ser incorporadas a las agendas del nuevo gobierno. Las respuestas de quienes aspiran a la presidencia para incorporar estas agendas serán clave para el futuro.



PÁGINA WEB:
www.iniciativaciudadana.org.mx



Iniciativa
Ciudadana PCD



@iniciativa_pcd



<https://www.youtube.com/user/Iniciativapcd>

BRÚJULA CIUDADANA 97

TELS. 5514 1072 / 5525 8232 / 5525 8276

XIOMARA PERAZA
EDITORA DE LA REVISTA BRÚJULA CIUDADANA
xiomara.peraza@iniciativaciudadana.org.mx

JUDITH MELÉNDREZ BAYARDO
DISEÑO Y EDICIÓN
judithmelba@gmail.com

